

## ¿Hay brújula, hay rumbo en el régimen de Pepe Lobo?

Ismael Moreno (sj)\*

*La etapa posgolpe de Estado está plagada de incertidumbre e inestabilidad. Dos meses después de haber asumido su mandato, el gobierno de Porfirio Lobo luce incapaz de definir su quehacer y precisar su identidad. Los sectores aglutinados en la Resistencia, aunque con una dinámica distinta, también están en una fase de definición y búsqueda. Mientras, la violencia se ha apropiado del país, enlutándolo y fraccionándolo hasta el agotamiento. ¿Es posible prever un desenlace?*

El fantasma del golpe sobrevuela en todas las esferas políticas hondureñas. El diputado Wenceslao Lara, del sector liberal golpista, levantó su mano unos días antes de la Semana Santa para pedir la palabra. El presidente del Congreso Nacional acababa de leer la propuesta que el presidente Porfirio Lobo Sosa presentó a la Junta Directiva del Legislativo para aprobar las nuevas medidas fiscales. “Nosotros los liberales —dijo Lara, diputado por el departamento de Cortés— propusimos un candidato que el pueblo hondureño eligió como presidente de la República. Ese liberal nos falló, y nosotros responsablemente lo quitamos y pusimos a otro en su lugar. Ahora les toca a los nacionalistas ser igualmente responsables con la nación, como lo fuimos nosotros”.

¿Quién decide en el país a partir del 27 de enero de 2010? De aquel hombre que en los años 2004 y 2005 levantaba el puño como símbolo de dureza y firme decisión frente a la delincuencia, solo queda un abrumado presidente, indeciso, con sonrisa nerviosa y hablar tambaleante, que dice no a lo que debiera decir sí y que dice sí a todos los que lo buscan para sacar particulares ventajas. Y no es para menos. Porfirio Lobo Sosa se montó en la silla presidencial más inestable de la historia nacional, en la que sólo puede sostenerse una persona severamente ambiciosa, por el solo gusto de ser presidente, como es su caso. Por cierto, muy similar a aquel que el 28 de junio trepó a la presidencia, por el mero gusto de ver cumplidos sus deseos, conscientes e inconscientes, de ser presidente, sin importar cómo ni a qué costo.

### **No se sabe quién, pero sí se siente qué**

“Nadie sabe quién de verdad manda y decide en el país”, es la frase clave que define la actual coyuntura. Nadie sabe quién, pero sí se tiene claro qué es lo que gobierna: la violencia y la inseguridad. Hay días en los que se han contabilizado hasta diecinueve homicidios, y las matanzas se han convertido en el pan nuestro de cada día. Cinco periodistas y varios dirigentes que se opusieron al golpe de Estado han sido asesinados en apenas dos meses. La violación sexual se ha

---

\* Director de Radio Progreso y del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación de la Compañía de Jesús (ERIC-SJ).

convertido en argumento bélico para aterrorizar y desmovilizar a la resistencia política organizada.

Una joven de la Resistencia de la región norte, violada el pasado mes de agosto por cuatro policías debidamente identificados —y que siguen muy firmes en sus postas policiales—, fue secuestrada en febrero junto con su familia; siete hombres vestidos de policías los condujeron a una montaña y, frente a los varones fuertemente amarrados a unos árboles, la joven y su cuñada fueron violadas por cada uno de los siete hombres. El que hacía de jefe dio la sentencia: “Esto te pasa por andarnos denunciando. Y la tercera vez te lo volveremos a hacer, y te vamos a matar”. Este dato, con sus pelos y señales, lo encontré en las propias oficinas del Departamento de Estado en Washington, en manos del responsable de derechos humanos para Centroamérica.

El mismo funcionario me lo confirmó<sup>1</sup>, me dio el nombre de la víctima principal, el jueves 4 de marzo, en la víspera de la reunión que sostendría la secretaria de Estado, Hillary Clinton, con los presidentes centroamericanos. Por tanto, esta mujer tan poderosa en la política mundial, conocía lo ocurrido a estas mujeres en Honduras. Sin embargo, en la reunión del 5 de marzo, declaró sin pestañear la decisión del gobierno de los Estados Unidos de restablecer la ayuda económica al gobierno hondureño y demandó a los gobiernos del continente reconocer la administración de Lobo Sosa “porque su presidente ha dado los pasos adecuados para la restauración de la democracia”.

Mientras conversaba con el funcionario del Departamento de Estado, se me confirmó de un porrazo que nada puede hacerse para lograr un cambio de postura en la política del mismo. Sus visiones son tan inflexibles como la misma religión a la que el Vaticano se aferra, aun con todas las evidencias en contra. Con los datos en sus manos sobre las brutales violaciones a las mujeres hondureñas, los funcionarios gringos hablaron muy claro: el gobierno de EUA está comprometido con la democracia hondureña, y ese apoyo pasa por el respaldo al ejército y a la policía. “No podemos ayudar a la democracia desde afuera —dijo Craig Kelly—, sólo estando dentro del ejército y dentro de la policía podremos lograr cambios”.

Y ante la pregunta que hicimos al responsable de derechos humanos, de cómo explicar que su gobierno decide apoyar a la policía mientras viola a las mujeres, el funcionario, con su impecable respeto y sin fruncir el ceño, dijo con firmeza: “Nadie puede estar seguro si fueron policías. Bien puede ocurrir que los delincuentes se vistan de policías para cometer fechorías”. Eran inútiles otras preguntas. El asunto estaba claro. El propio Departamento de Estado ha decidido fortalecer la delincuencia que, en estos aciagos tiempos de golpe y posgolpe de Estado, se viste real y formalmente de oficiales y agentes policiales.

---

<sup>1</sup> Me refiero a una visita que realicé en Washington del 1 al 5 de marzo, durante la cual sostuve entrevistas y expuse la situación del país y la necesidad de ver más allá del mero reconocimiento a la administración de Lobo Sosa, ante funcionarios del Departamento de Estado, de la Casa Blanca y miembros del Congreso.

## **La suerte está echada**

Las lógicas están muy bien establecidas y contrapuestas. Mientras los sectores que se opusieron al golpe de Estado siguen sometidos a persecuciones, amenazas, asesinatos y una feroz campaña publicitaria para hacerlos aparecer como parte de la violencia en el país, la comunidad internacional avanza inexorablemente en su proceso de reconocimiento al régimen, aunque los hechos indiquen que están reconociendo a un gobierno con una muy reducida legitimidad interna.

Eso lo saben, por ejemplo, los gobiernos de la Unión Europea, que han decidido jugar en las turbias aguas de la ambigüedad. Saben que al apoyar al gobierno están dando un tácito visto bueno a la política represiva que se ha comenzado a implementar, especialmente, desde la Secretaría de Seguridad, con el iracundo Óscar Álvarez, quien entiende que el asunto del país se resuelve aniquilando a los contrarios, sean estos delincuentes callejeros o dirigentes de la Resistencia. Y para curarse en salud, los embajadores europeos deciden poner en marcha un programa de protección a los defensores de los derechos humanos.

El paisaje no puede ser más elocuente: las embajadas —a través de la española que actualmente ocupa la presidencia *pro tempore* del G-16 en Honduras—, convocan a un evento a los defensores de derechos humanos; los embajadores acuden a la inauguración, pero dejan a sus oficiales en un cóctel de tercera categoría para acudir a un almuerzo con el Presidente de la República. La suerte está echada. La comunidad internacional acepta reconocer a un gobierno al que identifica como violador de los derechos humanos y con una línea de continuidad con el golpe de Estado. No lo dice con claridad —para algo existe la diplomacia con todos sus sofismas—, pero, de hecho, decide crear, paralelamente, algunos mecanismos para proteger a las potenciales víctimas de la política represiva del régimen, al que han decidido incorporar en la nómina de los países con sistemas democráticos.

## **¿Era necesario el golpe de Estado?**

Entre sus ambigüedades, la comunidad internacional ha sabido ir arreglando sus entuertos con Honduras. Pero no acaba de saber cómo enfrentar un conflicto que está enraizado en la dinámica interna del país. Por querer hacer frente a un conflicto geopolítico latinoamericano, los promotores del golpe de Estado despertaron dinamismos internos que estaban latentes, pero no activados. Con el correr de los meses, el asunto del golpe va despejando el panorama para dejar al descubierto actores e intereses que superan con mucho las fronteras nacionales.

Una vez más, a Honduras le tocó jugar un papel subalterno en la geopolítica internacional. El golpe de Estado no sólo fue un acto violento e ilegal, sino un hecho político innecesario. Si sólo hubiese sido por los factores internos, nunca se hubiese efectuado. No había necesidad de golpe de Estado porque, los sectores que internamente lo materializaron, tenían muy bien controlados todos los factores

que hacían políticamente inviable que la propuesta política de Mel Zelaya tuviera éxito.

No es ocioso recordar que el primer semestre de 2009 hubo una escalada de elecciones a cargos públicos, con resultados adversos a Zelaya Rosales. En enero se cristalizó la elección de quince magistrados a la Corte Suprema de Justicia, todos opuestos a su política; en febrero, la más rancia alcurnia dio su visto bueno a la elección del Fiscal General de la República y del Fiscal General Adjunto; un año antes, el mismo visto bueno lo recibió Ramón Custodio López, feroz detractor de las políticas de Zelaya, para reelegirse como Comisionado Nacional de Derechos Humanos; en abril, el Partido Liberal convocó a una Convención para elegir a la nueva directiva del Consejo Central Ejecutivo. Los electores llevaban una consigna que se cumplió a rajatabla: sacar de la dirección del partido a todos los miembros del equipo de Zelaya. Patricia Rodas cesó intempestivamente en la presidencia del Central Ejecutivo, y los convencionales eligieron nada más y nada menos que al gran perdedor del Partido Liberal en las elecciones primarias celebradas en noviembre de 2008: Roberto Micheletti Baín.

De estar en la lona, políticamente enterrado, Micheletti resurgió de esa Convención con energías inusitadas; los medios de comunicación se encargaron de colocarlo en una primera plana de la que lo habían desterrado meses atrás. De los 128 diputados al Congreso Nacional, la tercera parte estaba en contra de las políticas del equipo zelayista. En tales condiciones, la Cuarta Urna propuesta por Zelaya para las elecciones de noviembre de 2009, no podía pasar: las elites habían blindado toda la institucionalidad del Estado.

¿Por qué entonces el golpe de Estado? Porque los actores hondureños materializaron un plan detrás del cual había muchos más actores internacionales que locales<sup>2</sup>. En un contexto continental de confrontación geopolítica, Honduras fue la ocasión propicia para que la extrema derecha creara una barrera de contención al avance del proyecto chavista en América Latina. Estos sectores encontraron su sustento ideológico, y moral, en el discurso religioso neoconservador de la cúpula eclesiástica —católica y protestante—, que ha irrumpido en el ámbito político con una descarada defensa de los intereses de las elites más extremistas y corruptas de la política y la economía nacional.

---

<sup>2</sup> Semanas antes del golpe de Estado, altos representantes de organismos políticos de la extrema derecha continental, como *UnoAmérica*, se hicieron presentes para advertir que en Honduras se libraría una batalla frontal para salvar al país del comunismo de Hugo Chávez. A comienzos de marzo de este año, esos mismos personajes regresaron para afirmar que en Honduras se había ganado una batalla, pero que había que consolidarla para proseguir con otras, hasta enterrar al enemigo de las libertades del continente. También advirtieron que los enemigos de la democracia seguían activos y presentes, a través del Foro de Sao Paulo, donde se decidían acciones para recuperar el terreno perdido en Honduras; entre otras, atizar las luchas internas, como la que está ocurriendo en la región del Aguán, donde “unos grupos campesinos, en su afán por crear desorden, buscaban apropiarse de las tierras que legalmente pertenecen al próspero empresario Miguel Facussé Barjum”. Así lo dijeron, y así lo publicaron los medios de comunicación que justifican y avalan el golpe de Estado.

## **El conflicto en el Aguán**

En los dos primeros meses del régimen de Pepe Lobo, junto con la ola creciente de criminalidad y asesinatos cotidianos, el conflicto que más ha llamado la atención es el que permanecía latente en la región del Aguán, en el Atlántico hondureño. Los actores son los mismos que se han visto confrontados al menos en las últimas tres décadas: por un lado, Miguel Facussé Barjum, el empresario de origen árabe más emblemático del país; éste logró incrustarse en la dinámica del Estado desde los años setenta del siglo pasado, cuando en uno de los tantos regímenes militares desvió para sus arcas personales los millonarios fondos de la Corporación Nacional de Inversiones (CONADI), institución estatal creada para incentivar la industria, de la que Facussé Barjum era su presidente ejecutivo. Y, por el otro lado, están los campesinos de la región.

A inicios de la década de 1990, con el gobierno de Rafael Leonardo Callejas (1990-1994), Facussé influyó en el Congreso Nacional para que aprobara la Ley para la Modernización y el Desarrollo del Sector Agrícola (LMDSA), que en la práctica significa —entre muchas otras ventajas para los empresarios—, que las tierras destinadas a la reforma agraria pueden ser privatizadas; a la vez, provee a la empresa privada de basamento legal para proponer, a los grupos beneficiarios de la reforma agraria, entrar en programas de “coinversión”, lo cual significa que los campesinos aportan la tierra y la mano de obra, los empresarios la técnica y el dinero, y los beneficios, formalmente, se reparten entre los coinversionistas.

En los hechos, la LMDSA creó las condiciones para poner la tierra, y la misma vida de los campesinos, a merced de la dinámica agroindustrial exportadora. Una vez aprobada, Facussé se dedicó a “convencer” a los dirigentes y bases de las cooperativas —comenzando por las más exitosas en la producción de palma africana de la región del Aguán—, para que vendieran la tierra y los activos. Logró su propósito en apenas dos años de una agresiva campaña publicitaria sobre los beneficios de la “coinversión”, y las bondades de la empresa privada, que estaba dispuesta a “sudar la camiseta por Honduras”, como rezaba el lema oficial de los empresarios en aquellos años<sup>3</sup>.

### **¿Un callejón sin salida?**

Dos décadas después, aquellos polvos que levantó Facussé, en complicidad con el Estado y un puñado de dirigentes campesinos corruptos, se han convertido en un auténtico lodazal que capta toda la atención por su aguda conflictividad. Además, porque muestra la tierra movediza en que se asienta el país en que Pepe Lobo decidió continuar administrando una crisis insostenible y agudizada por el golpe de Estado.

---

<sup>3</sup> Es de recordar que en ese periodo se impulsaron, con gran ímpetu, los “ajustes estructurales a la economía”, y se brindaron todas las condiciones al capital extranjero para que incursionara en la agroindustria, en el campo, y en la maquila en algunos centros urbanos, especialmente del Valle de Sula.

La dinámica de esta crisis configura el presente de inestabilidad e ingobernabilidad que caracterizan a la actual administración pública. Apenas en dos meses del actual gobierno, unas trece personas han sido asesinadas en el marco de este conflicto agrario. El presidente Lobo, por su parte, decidió nombrar una comisión para impulsar una propuesta que conduzca a la resolución del conflicto, que es la punta del témpano en que se está estrellando toda propuesta o política que busca impulsar un gobierno atrapado en un verdadero laberinto o callejón sin salida.

### ***Pero, ¿quién podría ser el gran ganador?***

Miguel Facussé puso en marcha una campaña publicitaria para acusar a los campesinos de promover el desorden y la violencia en la región, y atentar contra la institucionalidad que garantiza la propiedad privada; asimismo, identifica a la Resistencia, particularmente a los jesuitas de esa zona, con su “teología de la violencia”, de atizar el conflicto para desestabilizar el país, como si en éste reinara la estabilidad.

Sin embargo, voces responsables y con mucha información fidedigna —a las que nadie podría acusar de simpatizar con la Resistencia, y más bien vinculadas con la elite empresarial—, sostienen que este episodio de conflictos en el Aguán lo estaría empujando el mismo Facussé quien, personalmente, y a sus 84 años de edad, arengó a las “turbas” que él mismo pagó para que, ante el Congreso Nacional, demandaran respeto a sus tierras a inicios de marzo. Así, aprovecha el desorden y la ausencia de brújula en el país y el Estado para sacar ventaja, como lo ha sabido hacer a lo largo de su vida empresarial.

Esta hipótesis parece ir tomando consistencia en la medida que avanza la propuesta de la comisión estatal conformada para resolver el conflicto. Para Miguel Facussé, podría significar los siguientes logros:

- 1) Que el Estado le compre al menos tres mil hectáreas con todas sus mejoras — es decir, los cultivos de palma africana— para traspasarlas a los grupos campesinos. Esta compra equivale, oficialmente, a casi cincuenta millones de dólares.
- 2) De las tierras adquiridas, entregarían dos hectáreas a cada familia: una para que cultive lo que le interese, y la otra para sembrar palma africana; de este modo, los campesinos quedan atados al capital de Facussé, puesto que la comercialización de este producto está controlada por él.
- 3) En virtud de los conflictos generados, Facussé quedaría exento de honrar sus deudas con la banca; y muy bien parado ante la sociedad hondureña, en virtud de su pericia para manejar los medios publicitarios más influyentes. Varios de los dueños o gerentes de estas empresas son sus parientes o amigos, por lo que no les cuesta presentarlo como benefactor de los pobres, y víctima de las incomprensiones y amenazas de los campesinos.

## Los entuertos que más enredan a Pepe Lobo

Dos meses después de haber asumido su mandato, el gobierno de Pepe Lobo se muestra incapaz de definir su quehacer y de precisar su identidad. Ha invertido sus mayores energías en hacer señales de auxilio para que la comunidad internacional reconozca su gobierno. Primero, formando un gabinete que lo hiciera aparecer como cabeza de un gobierno de unidad y reconciliación nacional. Segundo, intentando conformar una Comisión de la Verdad para hacer creer a la comunidad internacional que está cumpliendo con los acuerdos que desconoció el régimen de facto, y que se desmarca de la impunidad e imposición. Tercero, hace lo posible por quedar bien con todo mundo: con los defensores de los derechos humanos<sup>4</sup>; con la cúpula eclesiástica, católica y evangélica; y, con todas las corrientes de los partidos políticos y gremios, creando comisionados presidenciales para cualquier asunto.

Se esmeró por quedar bien con la Resistencia, cediendo el Instituto Nacional Agrario (INA) —el más ineficiente y el que apenas tiene presupuesto para pagar burócratas y combustible—, a César Ham, el presidente del izquierdista partido Unificación Democrática; éste es el personaje más controversial en los sectores opositores al golpe, vinculado con sonados casos de corrupción, y fuente de conflictos internos permanentes en la eternamente frágil izquierda tradicional hondureña.

Quiso quedar bien, además, con los poderosos gremios magisteriales nombrando como ministro de Educación al polémico dirigente magisterial Alejandro Ventura, militante del partido gobernante; y nombró a un ministro del Trabajo que, en su momento, fungió como secretario general de la Central General de Trabajadores (CGT); no obstante, desde hace mucho tiempo, se identifica con los sectores más conservadores y “mandrakeros” de la clase política.

Total, queriendo quedar bien con todos, Pepe Lobo organizó un gabinete que es como la torre de Babel: cada quien anda en lo suyo, cada quien maneja su propio lenguaje, y cada quien busca encaramarse en la dinámica del poder a costa de lo que sea. Dos meses han bastado para dejarnos una administración pública víctima de un ambiente de ingobernabilidad, donde se sabe que muchos deciden, pero donde no existen líneas que apunten hacia una dirección de autoridad creíble y de consenso. Una especie de reino de taifas<sup>5</sup>.

La violencia, a final de cuentas, es la que se ha apropiado del país; quienes la controlan en los espacios regionales, son los que, de hecho, gobiernan y deciden sobre la población. Honduras es un territorio parcelado por la violencia, y las instituciones del Estado acaban, en definitiva, subordinadas no tanto a las esferas

---

<sup>4</sup> Creó un Comisionado Presidencial de Derechos Humanos, como para dejar establecida la ineficacia del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos que encabeza el desacreditado Ramón Custodio López.

<sup>5</sup> En alusión a la España árabe del siglo XI, cuando se fraccionó el califato de Córdoba en pequeños reinos, políticamente independientes. Los más importantes fueron los de Sevilla, Badajoz, Valencia, Málaga, Almería, Denia y Granada.

de autoridad centralizadas en la capital, sino a las decisiones subterráneas y oscuras de cada una de las parcelas, zonales o regionales, en las que se administra la violencia.

## **Nuevo Pacto Social o plan estratégico de lucha**

La propuesta del gobierno que encabeza Porfirio Lobo Sosa no pasa de ser la continuidad de la propuesta de las elites empresariales y políticas que buscaron truncar el proyecto que, detrás del equipo de Zelaya Rosales, proyectaba con claridad la silueta política de Hugo Chávez Frías. Y un proyecto elitista de este tamaño, en lugar de acortar la inequidad y los conflictos que se han venido acumulando, apunta a ahondarlos. Diversos sectores coinciden en reiterar la necesidad de un Nuevo Pacto Social —o *plan estratégico de lucha*, como preferirían llamarlo algunos sectores organizados en la Resistencia popular—, y que tendría al menos los tres componentes siguientes.

### **Primer componente**

Definir contenidos que, en términos amplios, se podrían situar en tres bloques.

#### ***Primer bloque***

Demandas por redefinir el uso y la administración de los recursos naturales, la tierra y el medio ambiente. Esto tiene que ver, directamente, con lo que genéricamente suele llamarse lucha por la soberanía nacional. Si la soberanía es el control y la decisión del Estado y de la ciudadanía sobre su patrimonio, es muy difícil hablar de soberanía mientras los bosques, los ríos, el agua, el ambiente y la tierra estén en manos de elites hondureñas que, al final de cuentas, administran estos recursos para las multinacionales.

Soberanía es, sin duda, el mayor déficit del país, y esto no es una consigna. Se relaciona con contenidos patrimoniales. Una reforma agraria que aborde con responsabilidad la tenencia de la tierra, para evitar que un puñado de empresarios se queden con las tierras más fértiles, y subordinen la alimentación y la vida misma de la población campesina a los intereses de las multinacionales agroexportadoras, es una condición de posibilidad para que el campo hondureño deje de ser una bomba explosiva y fuente permanente de inestabilidad. Lo mismo cabría decir sobre los bosques, el agua, la energía, las minas y todas las riquezas naturales, como es el caso de la potencial existencia de petróleo en las tierras bajas y costeras del Atlántico hondureño.

#### ***Segundo bloque***

Demandas sociales que tienen que ver con educación, salud, vivienda, salarios, respeto a las etnias y minorías sexuales, respeto y promoción de la organización, y movilización social. Saber situar las demandas sociales vinculadas con las demandas por la soberanía y los recursos naturales, es un modo estratégico de garantizar la participación de toda la sociedad, sin dejar que sectores, considerados elitistas, acaben definiendo los contenidos de sus demandas como si fuesen demandas nacionales únicas, como ocurre con los gremios empresariales o, en otro campo, como ocurre con los gremios magisteriales.

### ***Tercer bloque***

Las demandas político-jurídico-institucionales vinculadas con las transformaciones que necesita el Estado para que, en efecto, se avance hacia lo que los sectores aglutinados en la Resistencia llaman “la refundación de Honduras”. Aquí es donde se sitúa la demanda por una Asamblea Nacional Constituyente, la que significó el argumento propicio para que las elites dieran el golpe de Estado.

Una Constituyente es, actualmente, la demanda política de mayor relevancia en el seno de las organizaciones que se convocan en el Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP); sin embargo, muy poco se ha pasado de la consigna al contenido que la sustente, y muchos la interpretan o asocian al liderazgo de Manuel Zelaya Rosales. Aunque mucho se habla, e incluso se escribe, los contenidos de una Constituyente aún están en una nebulosa, y gran parte responde más a entusiasmos que a un derrotero político definido<sup>6</sup>.

Una Constituyente desprendida de contenidos, puede ser una consigna de doble filo. Contribuye a despertar conciencia de lucha en los sectores situados en la Resistencia frente a los proyectos de las elites, pero puede ser un instrumento fácilmente cooptado o capturado por éstas, como ya lo han hecho con todas las reformas políticas e institucionales realizadas en las últimas décadas. Ya lo dijo un altísimo político hondureño: “Nosotros vamos por una Constituyente. La que no aceptamos es la de Mel Zelaya, porque no nos interesa tener que ver con Hugo Chávez. Pero una vez que pase la fiebre melista, nosotros mismos, a través de Pepe Lobo, la vamos a impulsar. Y vamos a redactar una constitución”.

### **Segundo componente**

Definir el sujeto social y político. Aquí se sitúa el debate sobre los partidos políticos y los movimientos sociales, la relación y la diferencia entre ambos, la identidad que ha de asumir el FNRP. El debate actual pasa, al menos, por establecer la relación y las diferencias entre tres posturas.

### ***Primera postura***

La que sostiene, primordialmente, el sector de la Resistencia vinculado orgánicamente a los liberales, y que en su mayoría son seguidores de Manuel Zelaya, aunque haya muchas diferencias secundarias entre ellos.

Un dirigente liberal lo formuló en una de las asambleas convocadas por el FNRP: “El Frente tiene tres rutas a seguir. La primera es la de la lucha armada, que la

---

<sup>6</sup> A mediados de marzo, a iniciativa del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) y en coordinación con el FNRP, se convocó a una asamblea de representantes de todo el país para hacer el simulacro de una Asamblea Nacional Constituyente. Allí se discutió lo relacionado con este primer componente. No obstante la riqueza de ejercicios como éste, el simulacro de participación popular aún no pasa de ser la convocación de sectores extremadamente afines a una manera de ver y entender el país; por sí mismo excluye el debate con los diferentes, y la demanda de estos sectores populares por una sociedad incluyente acaba, en los hechos, en una propuesta nuevamente excluyente porque, en este “experimento de Asamblea Nacional Constituyente”, sólo podían ser aceptadas aquellas personas que se acreditaban como firmes militantes de la oposición al golpe de Estado, y con una muy probada pertenencia a la tradición de izquierdas del país. Como ensayo de participación popular, este simulacro es muy ilustrativo; pero un nuevo pacto social no puede reducirse a los convencidos desde la óptica de la izquierda, sino en franca apertura y debate entre los diversos sectores de la sociedad.

descartamos porque ni nos dará resultados y porque en los primeros amagos nos aniquilará esa maquinaria de guerra que sostiene a la oligarquía; la segunda es la ruta de convertirnos en partido político. Es una posibilidad real, pero sabemos que la índole antidemocrática de la Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas nos lo impedirá con todas sus trancas; y, la tercera, es que el FNRP se convierta en una corriente interna del Partido Liberal que logre recuperar este partido de las actuales garras de la oligarquía, y que avance exitosamente a las elecciones para retomar las transformaciones que fueron truncadas por el golpe de Estado. Nosotros, los liberales en resistencia proponemos esta ruta”.

Convertir el FNRP en una corriente interna del Partido Liberal, o asociarse con uno de los tres partidos pequeños es, en opinión de un importante sector de la Resistencia, uno de los errores políticos que se deberán evitar, pues así sería presa del sistema de partidos políticos, que ya colapsó; una decisión de tal naturaleza vendría, a lo sumo, a dar oxígeno a un desahuciado.

### ***Segunda postura***

La relacionada con convertir al FNRP en un nuevo partido político con el cual se luche por las transformaciones contenidas en el primer componente de este Nuevo Pacto Social o *plan estratégico de lucha*. Quienes sostienen esta postura, argumentan que estamos ante el impostergable desafío de luchar por la toma del poder político y que, descartada la lucha armada, ésta sólo se logrará a través de las elecciones. Para ello se necesita un partido político que compita exitosamente con los otros cinco partidos, inmersos en un proceso irreversible de desgaste.

Sin embargo, otros piensan que convertir al FNRP en partido político sería reducir la fuerza de la Resistencia nacional —tan amplia y sostenida en muchísimas expresiones de base—, en una estricta lucha electoral y que, al final, conformar la Resistencia en un partido político llevará a que los liberales y otros, que resisten con filiaciones en otros partidos, retornen a sus antiguas estructuras partidarias; así, el nuevo partido político se convertiría en una propuesta similar a la de la Democracia Cristiana, Unificación Democrática o el Partido Innovación y Unidad que, en conjunto, no superan el seis por ciento del universo electoral. Un nuevo partido político sería un riesgo que reduciría la fuerza de lucha y de convocatoria del FNRP.

### ***Tercera postura***

La de quienes sostienen que el FNRP debe tener una identidad permanente como un frente amplio que canaliza, como movimiento social, las demandas de los sectores populares y sociales de todo el país, tanto de los gremios como de los sectores organizados comunitariamente en las zonas y regiones del país.

Una tendencia que jalona a un sector muy amplio del FNRP, afirma que éste deberá mantener su identidad a partir de dos modos de lucha en la presente etapa: el primer modo es la lucha de presión por debilitar, denunciar y desenmascarar el actual régimen político como estricto continuador del golpe de Estado, hasta obligar a que se convoque a una Asamblea Nacional Constituyente; y, el segundo, ir avanzando en la definición de una propuesta de candidaturas independientes que se convierta en una fórmula exitosa para las próximas elecciones generales.

La opción en esta postura es, entonces, la lucha política de confrontación frente a las elites que sostienen el actual régimen, y la lucha política electoral que, sin dejar de ser un movimiento social que se expresa en un frente amplio, participe a través de candidaturas independientes articuladas en torno de los grandes contenidos formulados en el primer componente, y que finalmente se han de expresar en las transformaciones políticas simbolizadas en una nueva Asamblea Nacional Constituyente.

### **Tercer componente**

Definir la participación en los procesos políticos electorales. Una vez definida la identidad del FNRP, en el marco del debate sobre las tres posturas apuntadas, se debe garantizar la lucha por democratizar los mecanismos de participación popular con el fin de que los procesos electorales dejen de ser expresiones que, bajo procedimientos legales, legitiman la propiedad del Estado para la reducida elite que impulsó el golpe de Estado.

Democratizar los procesos electorales es condición de posibilidad para la real participación ciudadana en la construcción de la democracia y el Estado de Derecho. Los expertos en estos temas, están de acuerdo en que el Estado de Derecho no puede existir sin democracia y sin respeto y vigencia de los derechos humanos.

Y, en nuestro caso, no se puede hablar de un deficiente Estado de Derecho, sino de ausencia de Estado de Derecho; por ello, en Honduras, no es tanto que unos grupos políticos o empresariales violan el Estado de Derecho, sino que, sin existir el Estado de Derecho, utilizan el término para hacer creer que cumplen unas leyes y defienden la democracia cuando, en los hechos, imponen la ley del más fuerte y violan los derechos humanos a rienda suelta.